

EL PENSAMIENTO ESPAÑOL.

DIARIO CATÓLICO, APOSTÓLICO, ROMANO.

PRECIOS DE SUSCRICION.—En Madrid: 12 rs. al mes y 60 por trimestres en casa de los comisionados, y 12 rs. al mes y 54 trimestre en la administración. En el extranjero: 20 rs. trimestre. En Ultramar: 30 rs. trimestre. La administración no responde de los sellos que se le remitan en carta sin certificar.

PUNTOS DE SUSCRICION.—Madrid: En la Administración, calle de Silva, núm. 49, entresuelo, y en las librerías de la Publicidad, Olamendi, Lopez, Payllé-Balliere, Cuesta y Lizcano. Provincias: En los puntos que se anuncian el último día de cada mes.

ADVERTENCIA.

Los señores suscritores de provincias cuyo abono concluye en 31 del presente mes, se servirán renovarlo oportunamente si no quieren experimentar retraso en el recibo del periódico.

No se admite otra clase de sellos que los de franqueo o certificado de cartas, y la administración sólo responde del recibo de los que le envíen en carta certificada.

PARTE EXTRANJERA.

El Sr. Scialoja, ministro de Hacienda del Gabinete piemonés, después de profundos estudios ha presentado a las Cámaras que hoy celebran sus sesiones en Florencia, el plan financiero con que piensa sacar de apuros al reino que llaman de Italia. El plan, como van a ver nuestros lectores, es completamente digno de un ministro economista, liberal é italiano.

El déficit que encontró a su entrada en el Gabinete el Sr. Scialoja era de 265 millones de francos. Para cubrirlo no había más que tres medios: contraer nuevos empréstitos, disminuir los gastos, ó aumentar los tributos. Del primer medio no quiere servirse el Sr. Scialoja, según manifestó en su discurso, por considerarlo ruinoso para el Estado y porque no lo estimaba necesario. Estas son las razones que adujo el ministro. El motivo verdadero no es otro que la imposibilidad de hallar quien preste ya un céntimo al reino de Italia. Eliminada esta medio propone una economía de 54 millones, y para cubrir los 210 restantes recurre al aumento de los antiguos impuestos y establece otros nuevos, entre ellos 40 millones sobre el vino y 35 sobre el aceite, los granos y las harinas; es decir, que los pobres italianos van a ser sitiados por hambre, pues a la contribución sobre las harinas inventada por Quintino Sella, añádense ahora las del aceite y el vino, ideadas por el profundo economista Sr. Scialoja, que tiene buen cuidado de recurrir a los artículos más necesarios para la vida.

Para que se vea todo lo odioso y vejatorio de estos nuevos tributos, no nos fijaremos más que en el que se refiere al vino, por ser entre todos los artículos nuevamente gravados el que es de menos necesidad, y por tanto parece ser menos irritante. El vino paga ya en Italia un tanto por su entrada, otro por consumo, otro por la venta al por menor, y otros por varios conceptos. Pues bien, ahora propone el Sr. Scialoja que pague además la *tassa de imbottito* ó de *imbottamento*, esto es, por la facultad de envasarlo. ¿Puede darse una opresión más injusta?

Pero el caso es que aun así se está muy lejos de conseguir el equilibrio del presupuesto; pues calculados los gastos necesarios para el cobro de los tributos y las pérdidas que en los antiguos habían de experimentarse a causa de las modificaciones introducidas, resulta, según la cuenta que sacan los diarios italianos más entendidos en la materia, que siempre resultará un déficit de 80 millones de francos. Esto por supuesto sin contar con que las economías propuestas que principalmente recaen sobre el ramo de guerra quedarán en mera conversación. Hé aquí, pues, el fruto de los estudios del economista Scialoja. Charlatanismo y nada más que charlatanismo: el charlatanismo está a la orden del día, como decía el diputado Polto, en las Cámaras piemonesas. ¡Pobre Italia!

Y ya que de Italia hablamos, véase una prueba de la fama de estabilidad y crédito de que goza el famoso reino después de tantos reconocimientos. El día 22 del corriente en que se verificó la apertura de las Cámaras francesas, Napoleón pronunció su discurso, bajaron de golpe cincuenta céntimos los fondos públicos italianos. ¿A qué fue debida esta baja tan repentina y considerable? ¿Fue acaso por las declaraciones de Napoleón relativas a la capital natural de Italia, y a la soberanía temporal del Papa que dijo ser indispensable? ¿Fue tal vez debida a las voces que dicen corrieron en la Bolsa de que el Gobierno de Florencia pensaba imponer diez céntimos sobre los valores públicos de Italia? Sea por lo primero, sea por lo segundo, la significación del hecho viene a ser en el fondo la misma: la de que el reino, así dicho, de Italia, no tiene sino una vida ficticia, temiéndose a cada momento verlo desaparecer.

Inglaterra, otro país formado y conservado a fuerza de iniquidades, no está lejos según los

síntomas de purgar sus grandes crímenes. El fenianismo, de que de vez en cuando cuidamos de hablar a nuestros lectores, sigue siendo una amenaza para esa soberbia nación. El *Times*, es decir, el diario británico más importante, pinta la situación como muy grave, y en efecto, debe ser así, pues Dublin como casi toda la Irlanda continúa en estado de sitio.

A pesar de esto la osadía de los fenianos aumenta en lugar de disminuir, viéndose a cada paso esparcidos por las calles de Dublín, y en pleno día, cubiertos de todo los bandos que declaran el reino en estado excepcional. También circulan a millares las proclamas de la secta entre el pueblo irlandés.

Véase un párrafo de una de ellas que leemos en un diario extranjero:

«Que todos los verdaderos irlandeses estén unánimes! Que todos sean prudentes! La grande obra de la emancipación comenzará muy pronto. ¡Invítalos a todos nuestros conciudadanos, sea cualquiera su profesión religiosa, católicos, protestantes, disidentes!»

En este sentido se hallan concebidas todas las proclamas que van suscritas por el «Comité de vigilancia».

Y como si no bastase con los fenianos para poner en aprieto a esa nación tan orgullosa, todavía ha surgido otra asociación en el alto y bajo Canadá, según escriben de América. La nueva sociedad es conocida con el nombre de *Los Hijos de la libertad*, y tiene por objeto anexionar el Canadá a los Estados Unidos. En Quebec, en Montreal y en otras ciudades en que predomina el elemento yankee ha hecho rapidísimos progresos. Al principio de Setiembre último decía que contaba ya con 240,000 miembros, de los cuales 180,000 eran capaces de manejar las armas.

«Cuán providencial es que el castigo de la Gran Bretaña le venga de las sociedades secretas, que tanta protección han encontrado en ese país bajo el pretexto de la ponderada hospitalidad inglesa!»

TELEGRAMAS.

PARIS, 29.

En la Bolsa de hoy quedaban: el 3 por 100 interior español, 4 3/4 1/4; el exterior, 4 00 0/0; la diferida, 4 00 0/0; la amortizable, 4 00 0/0; el 3 por 100 francés, 4 68-35, y el 4 1/2 98-50.

LONDRES, 29.

Los consolidados ingleses quedaban de 86 7/8 a 87.

EL PENSAMIENTO ESPAÑOL

MADRID, 30 DE ENERO DE 1866.

ENMIENDA AL PROYECTO DE CONTESTACION AL DISCURSO DE LA CORONA, PRESENTADA POR SIETE DIPUTADOS CATÓLICOS, CON ARREGLO AL REGLAMENTO DEL CONGRESO (1).

Señora:

Fausto acontecimiento para España fué siempre la apertura de las Cortes del reino en aquellos tiempos en que, no divididos sus hijos por estériles banderías políticas, los estamentos ayudaban al Monarca en la noble tarea de labrar la pública felicidad, puestos el corazón y el entendimiento en el bien común, no en satisfacer rencores y pequeñas é interesables miras de partido. El Congreso de diputados espera que sus juntas, por consecuencia de energías y bien meditadas reformas, que reclama urgentemente la pública opinión, lleguen a ser, en vez de piedra de escándalo, alivio y medicina del común malestar, y constante ejemplo de cordura, dignidad, decoro y sabiduría, como en otras edades lo fueron siempre las Cortes de estos reinos.

El Congreso de diputados se apresura a ofrecer a V. M. el concurso de su cooperación más decidida para obtener de la República de Chile aquella completa reparación que importa al honor de nuestra bandera y al limpio blason de España, que más que en otra ninguna parte debe aparecer radiante y respetado en las apartadas regiones que de nuestros padres recibieron el conocimiento de la Religión católica, perpetua fuente de la civilización verdadera.

Felicítase el Congreso de que las relaciones de España con las demás Potencias continúen siendo amistosas; pero no puede menos de significar a V. M., en cumplimiento de uno de sus más sagrados deberes, que la nación ha visto con honda pena y patente amargura que el Gobierno de su Reina, a quien sublima el glorioso dictado de *Católica*, haya reconocido el llamado reino de Italia, conjunto monstruoso de sacrilegios despojos y repugnantes iniquidades. Los españoles, como su Reina, católicos

(1) Esta enmienda la firmó por mayor número de diputados, si lo permitiera el Reglamento del Congreso. Así, por ejemplo, el Sr. Arrieta Mascara, dignísimo diputado por la católica y monárquica Vizcaya, no firma al lado de sus compañeros, por la razón indicada.

por excelencia, no pueden, no deben, no quieren reconocer lo que está por la Santa Sede calificado de nefario, y contenido en las personas de sus autores, cómplices, consejeros y adherentes. Los sentimientos y proverbial nobleza de la patria no lo consienten; sus tradiciones lo rechazan; a su futura grandeza perjudica.

Cumpliendo con la primera y más importante de sus obligaciones, el Congreso de los diputados examinará los presupuestos generales, y en ellos hará, sin menoscabo del servicio público, antes moralizándole y organizándole bien, todas aquellas discretas, útiles y oportunas economías que imperiosamente exigen la situación del Tesoro y el deber imprescindible de no desangrar y destruir a los pueblos.

En uso de su derecho deliberará sobre los proyectos de ley que le sean presentados, y acerca de ellos votará como su conciencia le dicte. Y si el Gobierno de V. M. no acude a necesidades de la mayor perentoriedad é importancia, el Congreso, en virtud de la iniciativa que le concede la Constitución de la Monarquía, se ocupará en su examen cual conviene al bien de la nación. Así tratará de remediar en parte los vicios del actual sistema político, estableciendo la absoluta incompatibilidad de todo empleo con el cargo de diputado. Atenderá a la futura conservación constante del orden público, proponiendo leyes preventivas que impidan tomar vuelo a incendios difíciles de cortar, una vez apoderados del social edificio. Indicará los medios conducentes a mejorar la condición de las clases pobres, harto desatendidas en estos tiempos, en que el afán de acrecentar riqueza ha aumentado la miseria del mayor número y ha privilegiado de hecho a los menos a costa de los más, desbaratando sin estudio ni preparación suficientes, con ciego frenesí, antiguas, sabias y fecundas instituciones nacionales de reemplazarlas atinadamente. No perderá de vista cuanto puede influir en mejorar las costumbres públicas, engendrar amor al trabajo, desterrar la ociosidad y la vagancia, y desconcertar el oficio en estos últimos tiempos muy generalizado de traficar impunemente en odios, injurias y difamación, y en rebajar y envilecer el honrado, severo y pundonoroso carácter nacional. Y por último, a toda costa procurará que la enseñanza pública se acomode y ajuste a las creencias del pueblo español, cuya Constitución vigor desde tiempos remotísimos sobre los dos vivificadores polos de la Religión católica y de la Monarquía hereditaria.

De esta suerte, Señora, no invocaremos el nombre de Dios en vano; lograremos hacernos dignos de su protección y ayuda; sabremos interpretar bien y fielmente los deseos de los pueblos; no despreciaremos sus justas voces y atenderemos al interés público en lo presente, preparando días prósperos y felices a las generaciones futuras. —CÁNDIDO NOCEDAL.—FRANCISCO NAVARRO VILLOSLADA.—GAVINO TEJADA.—MANUEL MARIA HERREROS.—JOSÉ MARIA CLAROS.—ANTONIO MARIA DE MUJICA.—ANTONIO DE ARGUINZONIZ.

Al principiarse ayer en el Senado la discusión del dictamen de contestación al discurso del Trono, se presentaron tres enmiendas. La del Sr. Corradi, relativa a la política en general, es la que desde luego se discute; otra del señor Seijas, y otra del señor marqués de Miraflores, relativas ambas al reconocimiento del reino de Italia. De estas, la primera será la que únicamente se discuta, según la calificación hecha por la mesa, en cumplimiento de los preceptos del reglamento.

Fué también entregada en la secretaría otra enmienda del Sr. Huet impugnando especialmente el reconocimiento del llamado reino de Italia. De conformidad con su autor, sin embargo, no se dió cuenta de esta enmienda, que también se hallaba firmada por el señor marqués de Baamonde, quien desde luego se asoció al Sr. Huet, renunciando a su propósito de presentar otra enmienda en el mismo concepto.

Hemos sabido que el motivo por qué no llegó a darse cuenta de la enmienda del Sr. Huet, es el siguiente. Siendo la más radical y opuesta a las palabras y al sentido del discurso de la Corona y el proyecto de su contestación, hubiera sido preferida para discutirse, quedando excluida la del Sr. Seijas. El temor de causar algún daño a la misma causa, cuya defensa se procura, porque aquella enmienda fuera menos aceptable que esta para algunos de los señores senadores, y consideraciones análogas y también de deferencia, resolvieron a su autor a renunciar a su propósito retirando la enmienda de acuerdo con el señor marqués de Baamonde; proponiéndose, sin embargo, uno y otro aprovechar cualquier oportunidad en la discusión para sostener sus principios en defensa de la causa de Su Santidad.

Creemos que esta oportunidad se presentará pronto, quizá en los debates que ayer mismo han comenzado en el alto Cuerpo colegislador; y que no tardará en resonar en aquel sitio la voz elocuentísima y profundamente católica de ámbos ilustres senadores.

Hé aquí, copiada a la letra, la enmienda del Sr. Huet, enmienda que, excusado era decirlo, satisface completamente nuestros deseos:

ENMIENDA AL DICTAMEN DE CONTESTACION AL DISCURSO DE LA CORONA.

«El Senado ha oído con dolor profundo que V. M. ha sido impulsada a reconocer el reino de Italia, y sin menoscabo de todo el acatamiento y veneración que justamente tributa a las palabras que V. M. se digna dirigirme, impulsada también a su vez por sus deberes con V. M. misma y con la católica é hidalgua nación española, se halla forzada a manifestar su parecer de que jamás hubo motivo de índole ninguna para que se propusiera a V. M., en ningún concepto, ni en ninguna forma, ese reconocimiento.»

«Solo un error hermanado con la buena fe, pero tan notorio, grave, lamentable y funesto, pudo inducir a los consejeros responsables de V. M. a proponerle que se mostrase ni aun siquiera indiferente, respecto de la existencia política de un nuevo Estado constituido a costa de violencias y usurpaciones contra naciones independientes, contra Monarcas y Principes legítimos, aun de la propia augusta familia de que es V. M. cabeza y autoridad primera; y sobre todo, contra los más sagrados derechos del Padre común de los fieles.»

«Lástima grande es, Señora, que no hayan llegado a V. M. las súplicas de todos los venerables Prelados de la Iglesia española y los clamores de multitud de súbditos leales de V. M. protestando desde el primer anuncio contra un reconocimiento tan abierta y notoriamente opuesto, muy más que a los intereses, a los sentimientos todos de esta nación, cuya noble altivez dividieron con nuevo y más grave error los que presentaron a V. M. una suposición contraria.»

«Han acertado por fortuna cuando le han propuesto las palabras que tan fielmente interpretan los piadosos sentimientos de V. M. asegurando su «profundo respeto y filial adhesión al Padre común de los fieles», que el Senado ha oído sin extrañeza, pero con grandísimo consuelo.

«Con no menos fidelidad han sido interpretados los deseos de V. M. en la manifestación de su propósito de «mirar por los derechos que asisten a la Santa Sede», y que son, no sólo la conservación de su Poder temporal, que hoy no puede católicamente cuestionarse, sino la integridad de su territorio y del Patrimonio de la Iglesia, según las reiteradas declaraciones y reclamaciones de Su Santidad misma.»

«Por eso, el Senado espera que el Gobierno de V. M. reparando en lo posible con inteligencia y patriotismo el mal causado, inicié y siga una política tan franca, enérgica y eficaz como fuere menester para procurar la reparación cumplida de las injusticias, conflictos y amarguras que han afligido y afligen al Santo y bendito Padre, que por nuestra dicha ocupa la silla de San Pedro; el reintegro de los territorios de que ha sido injusta y violentamente despojado en daño del patrimonio de la Iglesia; la seguridad de una vez para siempre de que no han de dañarle los enemigos descubiertos ó disfrazados del Catolicismo; y el respeto y afianzamiento de la justicia y la legitimidad en todas sus aplicaciones; una política, en fin, que si no halla correspondencia en otros Soberanos, (como todavía cabe esperar de sus mismos intereses) tranquilice cuando menos la inquietud de las conciencias de tantos millones de españoles que la reclaman; y afirmado ventajosamente la confianza de su Gobierno, atraiga las bendiciones del cielo sobre V. M. y su Real familia.»

«Palacio del Senado, 26 de Enero de 1866.—José María Huet.—Marqués de Baamonde.»

EL PENSAMIENTO ESPAÑOL ha insertado últimamente algunos documentos diplomáticos relativos al reconocimiento del llamado reino de Italia por el Gobierno español; acerca de los cuales será bien hacer, aunque brevemente las tristes reflexiones que sugieren su lectura é imparcial consideración y estudio; porque no es razón dejar sepultados en el olvido los antecedentes de un hecho de tanta trascendencia, mayormente viéndolo, como hoy lo vemos, esclarecido en parte por los documentos que acaban de presentarse en el Parlamento español.

Entre estos documentos hallase en primer término la nota dirigida por el ministro de Estado, Sr. Bermúdez de Castro, al embajador de S. M. en Roma. Esta nota fué publicada próximamente por la época del malhadado reconocimiento, y vió por entonces asimismo la luz en nuestro diario; por cuya razón siendo ya conocida de nuestros lectores, no la hemos insertado ahora, ni hay para qué detenernos en analizarla ni encomendarla. De una sola razón de ella creemos oportuno tratar; y es la que aligaba el ministro para justificar la funesta política inaugurada por el Gobierno, en los siguientes términos:

«Ni los peligros de una conducta fuertemente combatida en el interior, ni los inconvenientes, en el exterior, de un apartamiento sistemático de las grandes naciones del mundo, que, con una sola y natural excepción, han reconocido al reino de Italia, se hallarían compensados con la seguridad, ni aun la esperanza de contribuir así al restablecimiento de So-

beranos desgraciados, ó a la completa restauración del poder temporal de la Santa Sede. Cuando la base de nuestra política ha sido y debía ser necesariamente la neutralidad, nuestro aislamiento prolongado perjudicaría a España, sin favorecer al Papa ni a los Principes por cuyas desventuras hemos mostrado tan públicas y constantes simpatías.»

Fijese la atención en las palabras que hemos notado, las cuales expresan los imaginarios peligros temidos por el Gobierno de seguir una conducta combatida en el interior. ¿Qué conducta era esta? La seguida nobilmente por España hasta la hora fatal del reconocimiento; la noble y digna conducta que se resistía a entrar en relaciones con un usurpador sacrilego, que ha enagenado el patrimonio de su antigua casa de Siboya incautándose en patrimonio ajeno, y parte de él sagrado é inviolable. ¿Quiénes combatían esta conducta que aconsejaban a España tantos y tan altos principios, tantas tradiciones venerandas, tantos derechos y aun tantos infortunios augustos? La revolución. ¿Y cuáles eran los peligros de una conducta fuertemente combatida en el interior por la revolución? Sin duda que la revolución misma, irridada contra el Gobierno que siguiera observando dicha conducta, se lanzase a vías de hecho y alterase el orden hasta el punto de conmover los fundamentos en que está asentado.

Pues bien: abandonásteis esa conducta fuertemente combatida en el interior reconociendo a Víctor Manuel por Rey de Italia; hicisteis por conjurar los peligros que decíais se originaban de ella contentando a la revolución; no vacilásteis en afligir a la Iglesia y a la España para afianzar el orden material que creíais amenazado. ¿Y qué ha resultado? ¡Ah! Si la voz de la razón, advertida oportunamente por quienes tienen el sagrado encargo de dirigirla por los caminos de la verdad y de la justicia, no hubiera sido bastante para argüir de quiméricos vuestros temores, ó, mejor dicho, para demostrar la gran vanidad y locura del medio empleado para conjurar los supuestos peligros del no reconocimiento, los hechos han venido a probar, una vez más, que la revolución jamás se contenta ni hace alto en sus fuertes embestidas, que la política de concesiones no logra conjurar males ó peligros sacrificando las miras é intereses de una política noble y generosa en aras del liberalismo; en suma, que es un engaño deplorable creer que España, nación católica por excelencia, puede salir perjudicada jamás por mantener una fidelidad constante a la Santa Sede y una oposición no menos constante y decidida a sus desdichados enemigos.

Pero el documento diplomático, no publicado ni conocido hasta ahora, que más convicia a la reflexión y al estudio, está expedido en Roma a 18 de Junio de 1865 por el que era a la sazón nuestro embajador, el Excmo. Sr. D. Joaquín Francisco Pacheco, hoy separado para siempre de la política y de las demás cosas y vanidades de la presente vida. Note el lector la fecha: 18 de Junio, es decir, tres días antes de la caída de Narvaez y de la subida al poder de O'Donnell. La comunicación de Pacheco se dirigía, pues, al ministro que despachaba la cartera de Estado en los últimos días de vida del Gabinete moderado. Veamos ahora lo más importante del despacho de nuestro embajador; dice así:

«La salud del Padre Santo es buena, como lo viene siendo hace muchos meses. Está quizá un poco más delgado, lo que seguramente no es un mal. Se encontraba ayer de buen humor, y me habló, entre otras cosas de la posibilidad del reconocimiento de Italia por nuestra corte. Yo le dije, y así es verdad, que ninguna noticia tengo y que ninguna prevención me ha hecho V. E. sobre tal acontecimiento; le añadí que no creía que este ministerio lo realizase, y que en todo caso sería siempre imposible el que nos separásemos de la Santa Sede. «Pero O'Donnell vendrá, me dijo, y entonces no podrá menos de verificarse.» A semejante réplica V. E. comprende que yo no tenía nada que contestar.

De mi conversación con el Sumo Pontífice (aparte de lo que podría inferir respecto a la negociación italiana, de la cual hablaré a V. E. en otro despacho), saqué dos impresiones. Primera: que las noticias que de Madrid recibe este Gobierno le hacen temer, como muy probable, un cambio de política de personas al frente de nuestra nación. (V. E. sabe cuántas relaciones median entre Roma y la capital de las Españas, y no extrañará que lleguen aquí ecos de todos los rumores más ó menos fundados que corren por esa.) Segunda: que la idea del reconocimiento de Víctor Manuel por nuestra parte se va extendiendo en estas regiones, y ace. tándose como una cosa sin remedio. No se aplaude, no se recibe con gusto, pero se la oye con una triste resignación. Yo creo que si se consiguiera, al hacer ese reconocimiento, algún acto de garantía en favor del poder temporal del Sumo Pontífice se nos había de estar agradecido.»

V. E. me escusará si le hablo así de un asunto acerca del cual no me he dicho una sola palabra, pero que afecta demasiado a todos nuestros intereses para que constantemente no me preocupe. El juicio, que le acabo de emitir, me le espanta hoy textualmente a una de las personas más altamente colocadas en este gobierno. «Pues que es necesario que Vds. reconozcan la Ita-

lia, no lo hagan como los demás. Obtengan Vds. que se respete lo que nos queda, que haya para esto un compromiso de las potencias católicas, y no podremos quejarnos de su conducta.»

A muchas y graves observaciones se presta este singular despacho: pero nosotros haremos únicamente dos.

En Roma, escribía el Sr. Pacheco refiriéndose a la idea del reconocimiento, «no se aplaude, no se recibe con gusto, pero se la oye con una triste resignación.» El Padre Santo, añadía nuestro embajador, tenía un cambio de política que trajese al poder un ministerio que reconociera los hechos de la revolución italiana. Temor, tristeza, resignación en los males temidos: hé aquí la triple y dolorosa impresión que embargaba el ánimo de Pío IX sólo de pensar en el reconocimiento futuro. ¿Cuál no debió ser, pues, su amargura al ver confirmados sus tristes pronósticos? Si la sola consideración del cáliz que le iba a propinar el gobierno de la Unión liberal, ya le oprimía con dolorosa angustia y era a sus ojos asunto de triste resignación, ¿cuál no sería su tristeza al apurar el cáliz hasta las heces? ¡Ah! La triste resignación de Pío IX representándose el reconocimiento futuro nos trae a la memoria las palabras de Jesús en Getsemani ofreciéndose a beber el cáliz de su dolorosa pasión.

¿Y todavía se dirá que el reconocimiento de las iniquidades hechas en Italia es favorable a la Iglesia? ¿Cómo entonces se explica el temor de la Santa Sede, la tristeza y resignación del Soberano Pontífice? Los favores engendran gozo, no quebranto: la resignación es la virtud que resplandece en medio de los males; ¿o es que Roma no conoce sus verdaderos intereses y teme cuando debe esperar, y llora cuando debe alegrarse, y se resigna cuando debe dar gracias? Locura sería pensar; irreverencia decirlo. No; Roma sabe muy bien todas estas cosas, y otras muchas; Roma sabe mejor que nadie de dónde soplan los vientos de la bonanza y de la adversidad; y así, pretendiendo que agradezca como una merced lo mismo que la entristece, es añadir al daño la irreverencia, al golpe el escarnio; es vestirle al Vicario de Cristo la púrpura del pretorio y saludarle con ayes irrisorios.

La segunda observación que deseamos hacer procede de aquellas palabras que nuestro embajador pone en boca del Pontífice: «Pero O'Donnell vendrá, y entonces no podrá menos de verificarse (el reconocimiento).» Sobre estas palabras ha observado en uno de sus despachos el actual ministro de Estado, que la necesidad del reconocimiento español era confesada por la Santa Sede al decir que O'Donnell no podía menos de hacerlo consultando los intereses de nuestra nación. Pero esta deducción es viciosa: porque la necesidad a que se refería el Padre Santo en las palabras transmitidas por Pacheco, no era ciertamente una necesidad moral, un deber de patriotismo, una verdadera razón de Estado, sino la necesidad consiguiente a los antecedentes y opiniones de las personas que el Papa tenía no sin gravísimo fundamento que entrasen a mandar en España. ¿Acaso no se había ya propalado el propósito de O'Donnell de reconocer el amasijo que llaman reino de Italia? ¿No eran también públicas las palabras de Posada Herrera sobre este punto en el Congreso? ¿A quién se ocultaban los designios de la Unión liberal engendrados sin duda del deseo de ganar popularidad con los progresistas y demás revolucionarios? El mismo nombre de unión liberal, no denota comunidad de ideas y fraternidad de corazón con el liberalismo que ha fundado el nuevo derecho de los italianos y la Italia una sobre las ruinas de los antiguos tronos y naciones apoyados en el derecho divino y por consiguiente eterno e inmutable? ¿Qué mucho, pues, que el Papa anunciase el irrucho cuando tan conocido era el árbol que había de llevarle? ¿Acaso podía ser protegido en todos sus derechos por la unión liberal el que poco antes había declarado la imposibilidad de reconciliarse con el liberalismo?

JUAN MANUEL ORTÍ Y LARA.

Insertamos íntegro a continuación el proyecto de contestación al discurso de la Corona, leído ayer en el Congreso.

Llamamos especialmente la atención hacia el párrafo relativo a la cuestión de Italia. Como se conoce a la primera lectura, el párrafo, sin expresar con la debida fuerza y energía los sentimientos católicos; sin decir todo lo que debe esperarse de los diputados de una nación como la española, eso nos parece muy ministerial. Ha sido, en efecto, el resultado de la oposición de algunos individuos de la comisión a parafrasear el discurso de la Corona, cual se acostumbra cuando hay identidad completa de miras entre el Congreso y el Gobierno, y de los esfuerzos hechos para convenir en una redacción en que todos estuviesen de acuerdo.

Creemos que el párrafo, tal como está, no ha de ser por lo tanto del agrado de la parte ardiente de la Unión liberal, que tal vez formulará hoy alguna enmienda sobre este punto.

De todas maneras, el triunfo para nuestras ideas, aunque parcial, es indudable. Cuando se trata del Padre Santo y de la causa de la Religión, hay hasta ministeriales que retroceden asustados ante el peligro de no aparecer como verdaderos católicos. Esta reflexión, en medio de todo, es consoladora.

Sigamos trabajando y esperemos en Dios.

He aquí el proyecto:

«Señora: El Congreso de los diputados considera

siempre la angustia presencia de V. M. en el seno de la representación del país como un feliz augurio con que da principio a sus tareas legislativas, bien sea para asombrar respetuosamente sus esfuerzos a la solicitud de V. M. por el progreso y ventura de esta nación, bien para prestar a las instituciones, al Trono y a la dinastía el consejo y apoyo necesarios en los momentos de conflicto.

Deñese el Congreso de que la obstinación injustificable por parte de la República de Chile en negar una reparación honrosa de los agravios inferidos a España, haya producido un rompimiento que no ha alcanzado a evitar ni el solicitado anhelo de V. M. por la paz, ni su constante deseo de mantener buena y leal inteligencia con los Estados de América establecidos en los antiguos dominios españoles.

El Congreso examinará los documentos que el Gobierno ha presentado sobre este asunto, y V. M. pueda contar con la eficaz cooperación de esta Cámara para que la dignidad y el honor nacional se sostengan allí como en todas partes a la altura que exige el prestigio del pabellón español.

Con íntima satisfacción ha oído el Congreso, que las relaciones de España con las demás Potencias extranjeras continúan siendo tan amistosas como lo eran antes de terminar la última legislatura y que un nuevo tratado de paz y de reconocimiento con la República de San Salvador, estendiéndose y consolidando nuestras relaciones, tan leales como desinteresadas en aquellas apartadas regiones.

El Congreso aprecia debidamente los diversos y graves motivos fundados en los intereses permanentes de la nación, que han impulsado a V. M. a reconocer al reino de Italia, y se congratula de que no se hayan entibiado sus sentimientos de profundo respeto y de filial adhesión al Padre común de los fieles, ni menos cedido el firme propósito de V. M. de mirar por el poder temporal de la Santa Sede.

Los documentos que para su examen han sido presentados, hacen ver con satisfacción al Congreso las gestiones que para coadyuvar a las elevadas miras de V. M. viene practicando nuestro Gobierno.

Los representantes del país reconocen la necesidad de reformar algunos impuestos a fin de aumentar los ingresos del Erario, con el menor gravamen posible para las clases que los satisfacen. No menos conveniente, y tal vez de necesidad más imperiosa, considera el Congreso la introducción de severas economías en los gastos públicos, que auxiliadas por los importantes proyectos que el Gobierno de V. M. medita y se propone presentar a las Cortes, habrán de producir la apetecida nivelación en los presupuestos del Estado, la consolidación del crédito público y la resolución por último de las dificultades de la Hacienda.

Compácese sobremanera el Congreso de que el Gobierno vea en el desenvolvimiento de las fuerzas productivas intelectuales y materiales del país el verdadero medio de acrecentar los recursos del Tesoro. A lograr este resultado contribuirá poderosamente los proyectos que prepara nuestro Gobierno, encaminados a asegurar al propietario la tranquila posesión del fruto de su capital y trabajo, a disminuir las dificultades que embarazan el crecimiento de algunas industrias, a multiplicar las vías de comunicación, a facilitar el aprovechamiento de las aguas, a necesidad tan vivamente sentida en nuestro suelo, y a difundir los acontecimientos útiles a la agricultura y a las artes, a mejorar por fin y propagar la primera enseñanza, reforma esta última plausible sobre todo por su eficaz influencia en el progreso intelectual y moral de los pueblos.

Para obtener el rápido y progresivo movimiento en las mejoras que reclama la moderna civilización, reconoce el Congreso que es indispensable vindicar el espíritu de libertad municipal, tan importante siempre y valioso en la historia de nuestra patria, por medio de leyes que en armonía con la que regula el gobierno y administración de las provincias, agranden y promuevan la vida del municipio, si bien concentrándola en los verdaderos intereses de la administración local. Así podrá facilitarse el concurso de la actividad privada, principal resorte del progreso de los pueblos modernos.

El Congreso de los diputados participa de los generosos sentimientos de V. M. en favor de las provincias situadas al otro lado de los mares, y las considera ciertamente dignas por su inalterable fidelidad, de que no se desmoren más tiempo las reformas que convienen a sus respectivas necesidades, y que por otra parte aconsejan los intereses generales de la nación.

El proyecto de ley para peaar el tráfico de esclavos será objeto preferente de las tareas de esta Cámara, en tanto que prepara el Gobierno, con el estudio que exige su importancia, las leyes especiales por que han de regirse aquellas posesiones.

Grato es para el Congreso el anuncio de que habrán de ser sometidos a su examen los proyectos de ley de organización de los tribunales, de enjuiciamiento y de casación en materia criminal, que vienen a satisfacer una necesidad generalmente sentida por los que en la ordenada y pronta administración de justicia ven la más firme base de la sociedad y la más sólida garantía de los derechos políticos y civiles.

El honor del pabellón nacional está en estos momentos confiado al valor y patriotismo de nuestra marina en remotos países. No duda el Congreso que corresponderá con sus actos a lo que de ella exigen el aprecio que V. M. le ha manifestado y las gloriosas tradiciones del país.

El Congreso de los diputados que había oído con satisfacción de los augustos labios de V. M. que la tranquilidad pública momentáneamente turbada en Lérida y Zaragoza había sido al punto restablecida, ha visto recientemente con el más acerbó dolor la criminal tentativa de algunos, aunque pocos, militares que faltando al honor de su bandera y seguidos de algunos cuantos hueros osaron convertir contra la ley las armas que les habían sido confiadas para su defensa, y que sólo para ella y en gloria de la patria podían ser noblemente empuñadas.

Semejante atentado, tanto más digno de reprobación cuanto que el fiel cumplimiento de la Constitución y de las leyes garantiza hoy a los ciudadanos el ejercicio pacífico de todos sus derechos, ha venido a estrellarse en la energía y en el acierto del Gobierno, en la lealtad de la gran mayoría del ejército y en la sensatez de esta generosa nación, que afeccionada con la triste experiencia de las revoluciones, comprende que sólo a la sombra de la paz pueden alzarse más y más las públicas libertades y desarrollarse el trabajo, fuente de virtud y de bienestar en los individuos, de poder y grandeza en las naciones. El Congreso confía en que el Gobierno de V. M. combatirá con ma-

no firme las causas y elementos de futuros desórdenes condenados por cuantos se interesan en nuestra regeneración política y en la conservación de los altos y venerados institutos que rigen los destinos de la patria.

A salvo y completamente asegurado el orden público, base primera de toda sociedad, y practicando lealmente la política tolerante y liberal que ha proclamado nuestro Gobierno, sea intérprete en este punto de los sentimientos del Congreso, podrá marchar desembarazadamente el nobilísimo pueblo español por el camino del progreso a que están llamadas las naciones, y que con la protección divina va la nuestra recorriendo tan gloriosos mente desde los primeros días del reinado de V. M.

Palacio del Congreso, 27 de Enero de 1866.—Pedro N. Auriol, presidente.—Valeriano Casanueva.—Antonio de Mena y Zorrilla.—Madoeste de la Fuente.—José Moreno Nieto.—Manuel Silvela.—Francisco Millán y Caro, secretario.»

DOCUMENTOS PARLAMENTARIOS.

A continuación insertamos los dos proyectos de ley presentados ayer al Senado por el ministro de la Gobernación, Sr. Posada Herrera, acerca de la imprenta y asociaciones públicas:

PROYECTO DE LEY ADICIONAL A LA LEY DE IMPRENTA DE 28 DE JUNIO DE 1864, PRESENTADO POR EL GOBIERNO DE S. M.

A las Cortes. La memoria de los últimos sucesos que han tenido durante breves, aunque pecosos días, en ansiedad profunda a la nación, no hará que el Gobierno de S. M. abandone el sistema represivo que ante los Cuerpos colegisladores prometió adoptar para los extravíos de la prensa. Al contrario: el ministerio reconoce que hoy más que nunca es vano empeño querer sujar a través de un examen cuanto pretenda darse a luz pública, y que en todos los casos el único medio de prevenir el delito es prevenir la impunidad del delincuente, como lo enseña el derecho penal de las naciones cultas, y como lo acredita la experiencia, sin que haya en realidad razón plausible para colocar la imprenta fuera del derecho.

Este sistema represivo, aunque el único conforme con la Constitución del Estado, expone, sin embargo, a grandes riesgos donde, como en España, el hábito de discutir los intereses públicos no ha generalizado todavía aquel espíritu de moderación, y por decirlo así, de urbanidad política, sin el que todo debate es odioso e indigno de libertad. La prensa entonces sirve principalmente para la libre emisión de insultos y vituperios, que jamás se han confundido con las ideas en la ley fundamental de ningún pueblo civilizado, y el lenguaje siempre respetuoso de la ciencia tiene que ceder al clamor de adocenados escritores, que abrogándose benevolencia la misión de ilustrar al país por medio de la prudencia y del escándalo, debilitan los sentimientos de respeto a las autoridades y relajan todos los vínculos del orden establecido.

En vano será buscar el objeto patriótico y la poderosa razón de estado que tuvieron los reyes para llevar el iuto y la libertad al seno de numerosas familias, y hacernos aparecer como país condenado para siempre a discordias fratricidas. Cuando se ridiculiza y escarnece toda idea de orden; cuando se mata en el corazón del industrial humilde y del soldado todo sentimiento de respeto, entonces sólo se sublevarán los malos instintos, siendo ocioso preguntar por su programa político a meros saqueadores de la sociedad incrimine. Y es tanta y tan profunda en esta parte la perversión moral, que en nombre de la libertad, y hasta de los hombres honrados, se ha intentado una transformación política que debía empezar rompiendo las cadenas de los presarios, y dando a sus instintos brutales el triunfo de la libertad y del derecho.

Atento el Gobierno a descubrir el origen de estos sucesos, y teniendo en cuenta que a toda material perturbación precede un trastorno moral, no vacila en reconocer que el ludibrio incesante de agustas instituciones, y las bulonadas que se prodigan por medio de la imprenta contra lo que hay de más respetable en el orden social y político, es una de las causas que más ha contribuido a los recientes y lamentables sucesos, al paso que comprometen en el exterior la dignidad de una nación diamante maltratada por sus propios hijos en todo aquello que guarda con mayor estima. Y como tales sucesos constituyen delitos ordinarios que no pueden entrar en el programa de ningún partido político, se está en el caso de procurar que una vez perpetrados, se castiguen con mano fuerte, para que así, quedando íntegra la libertad del escritor, tenga su correctivo el abuso, lo cual exige que se hagan en la vigente ley de imprenta algunas alteraciones que el Gobierno de S. M. tiene el honor de proponer a las Cortes por medio del siguiente

PROYECTO DE LEY ADICIONAL A LA LEY DE IMPRENTA DE 28 DE JUNIO DE 1864.

Artículo 1.º Los editores responsables de que trata el artículo 14 de la ley de imprenta vigente, no podrán continuar siendo desde el momento en que contra ellos se dicte auto de prisión por alguno de los delitos contra la Religión, el Rey o la Real familia, comprendidos en los números 1.º y 2.º del artículo 24 y en el artículo 27 de la misma ley.

Art. 2.º El que injuriase por medio de la imprenta a cualquiera de los Cuerpos colegisladores, a la mayoría o minoría de los mismos, o a alguna de sus comisiones, será castigado con la pena de arresto mayor o prisión correccional, y podrá ser perseguido de oficio ante los tribunales ordinarios.

Art. 3.º Los delitos definidos en el número 2.º del art. 192 del Código penal, se considerarán como delitos comunes cuando se cometan por medio de la imprenta, y serán perseguidos y castigados con arreglo a lo que el mismo Código dispone.

Art. 4.º Igualmente se perseguirán como delitos comunes los que se cometan en escritos que tiendan a relajar la fidelidad y disciplina de la fuerza armada de algún modo que no esté previsto en las leyes militares.

Madrid, 29 de Enero de 1866.—José de Posada Herrera.

PROYECTO DE LEY, PRESENTADO POR EL GOBIERNO DE S. M., SOBRE ASOCIACIONES PÚBLICAS.

A las Cortes. El adjunto proyecto de sociedades públicas es una medida de las más importantes que el Gobierno propondrá a la deliberación de las Cortes con el objeto de asegurar la tranquilidad interior. El derecho de asociarse para realizar los diferentes fines de la vida, aunque no se halla escrito en la Constitu-

ción del Estado, es tan natural en el hombre, que en todos tiempos le ha ejercitado para disminuir su debilidad propia con el auxilio de las fuerzas de los demás. La asociación en sus diferentes formas y aplicaciones a los variados intereses particulares y públicos, es el elemento más eficaz de cuantos han contribuido al desenvolvimiento moral y político de los pueblos de Europa. La historia del derecho y de las vicisitudes exteriores del principio de asociación, es la historia de los cambios y transformaciones más íntimos en la situación económica, social y política de las naciones. Primero nos presenta ligas, hermandades, cofradías y corporaciones privilegiadas; después sociedades secretas en su organización, aunque creadas con el propósito de trastornar el Gobierno de los Estados; y por último, cuando las reformas y Constituciones nuevas dieron libertad a la industria y llamaron a los pueblos a intervenir en los negocios generales, nos ofrecen en todas partes una firme tendencia a realizar por medio de la asociación el progreso individual y público a que aspiran los individuos y las naciones.

Pero si el espíritu de asociación crece y se desenvuelve a la par que todas las instituciones necesarias, también en todo tiempo se ha reconocido, como nuestras leyes lo expresan, que las asociaciones, so color de bien y guarda de su derecho, se hacen muchas veces no a buena intención, y que de ellas pueda seguirse escándalos y discordias.

Esta dificultad de impedir los males que pueden resultar del abuso del derecho de asociarse sin perder las ventajas que los individuos y el Estado deben esperar de la asociación, sube de punto en los tiempos modernos, que buscan en la cooperación de la actividad individual, no sólo el desenvolvimiento de la industria, de la agricultura y del comercio, sino también la propagación de las ciencias, el conocimiento de las necesidades públicas y los medios de satisfacerlas, el pensamiento, en fin, y la voluntad de la nación condensados y formados. Las ciencias políticas no han acertado aún a definir las diversas clases de asociaciones que empíricamente son conocidas, y la nomenclatura jurídica es por lo mismo tan oscura e imperfecta, que todo produce necesariamente aquella confusión que respecto a este punto se revela en la opinión y en las disposiciones legales. La ley de 22 de Junio de 1864 separó las asociaciones de las reuniones, que son su forma transitoria; pero aún quedan confundidas las asociaciones de índole tan diversa, que una asociación para cultivar un campo o explotar una industria necesita seguir los mismos trámites que la formación de un club revolucionario que se propone el incendio de las fábricas o la división de la propiedad ajena.

La ley, prescindiendo de las sociedades secretas, no establece casi otra distinción entre las asociaciones ilícitas y las que no lo son, que el haber merecido o no el consentimiento de la autoridad pública. El Gobierno cree, sin embargo, necesario y urgente evitar la reproducción de los males causados por el abuso del derecho de asociación, y dejando al desarrollo constante que nace de los cambios sociales y de los progresos de las ciencias morales y políticas el formular los límites de aquel derecho en todas sus diversas categorías, adoptar hoy las disposiciones convenientes para que las asociaciones públicas no sean un estímulo de trastornos futuros y un peligro constante para la pública tranquilidad. No es posible permitir que continúen por más tiempo enfrente de las autoridades legalmente establecidas, asociaciones desde las cuales se amenaza a los poderes públicos y se les señala el término de su existencia. Todas las naciones de Europa, aun aquellas que han reconocido como base de su Constitución el derecho de asociarse sin sujeción a ninguna medida preventiva, se han visto tarde o temprano en la necesidad de adoptar reglas que contra el abuso de aquel derecho sirvan de seguridad a las grandes instituciones del Estado y a los principios fundamentales del orden social.

La libertad individual, aun considerada en su esencia absoluta, tiene por límite la libertad de los demás, y por consiguiente la libertad y los poderes del Estado. Mientras el individuo limita el ejercicio del derecho de asociarse a los fines de la vida particular y aprovecha las fuerzas de la asociación en las empresas de la agricultura, del comercio o de la industria, puede el Soberano mostrarse indiferente a los abusos, y dejar que los males, y su consecuencia cierta, sirvan de escarmiento a la temeridad o la malicia; pero cuando la asociación por sus fines tiene un carácter público; cuando los recursos y la actividad de los individuos que la componen se emplean en objetos que pertenecen a la administración o a la política; cuando por su medio se intenta acelerar, retardar o dominar la acción de las instituciones del país, entonces el Estado, por su propio derecho, y como representante de la mayoría, tiene el deber de mantener la independencia de su autoridad y de protegerla contra las invasiones de una minoría audaz y turbulenta. El Gobierno está muy lejos de tener el propósito de extinguir toda asociación pública. Desea por el contrario su concurso, y la considera como complemento de la organización administrativa y política, aun en los pueblos no regidos por instituciones liberales.

Por eso al meditar sobre este asunto, y comparando las diversas legislaciones de Europa, ha elegido como modelo la de aquella nación cuya excentricidad administrativa es más elogiada, y en la que el derecho de asociación es fundamento de la Constitución del Estado, y se halla no solamente escrito en las leyes, sino encarnado en las costumbres de los pueblos. Las disposiciones que ahora se proponen a la deliberación de las Cortes han sido ya en aquella nación sometidas a la prueba de la experiencia, y han producido resultados provechosos a la paz pública, sin menoscabo de la libertad individual.

Las Cortes podrán, sin embargo, perfeccionarlas y añadir otras más eficaces. El Gobierno verá con gusto y aceptará presuroso todo cuanto contribuya a realizar el objeto que se propone al presentar al Senado el adjunto proyecto de ley de asociaciones públicas.

Madrid, 29 de Enero de 1866.—José de Posada Herrera.

PROYECTO DE LEY DE SOCIEDADES PÚBLICAS.

Artículo 1.º Es ilícita toda asociación de personas que tenga por objeto la propagación de doctrinas contrarias a las bases fundamentales de la sociedad o a las de la Constitución del Estado.

Los jefes y directores de tales sociedades, y los individuos de las mismas, y los que prestaren para su reunión las casas que posean, administran o habitan, serán castigados con las penas en un grado inferiores a las que respecto de las sociedades secretas señala el art. 208 del código penal.

Art. 2.º Si constare que una sociedad de las comprendidas en el artículo anterior tiene por objeto alguno de los delitos definidos en los capítulos primero y segundo del título III, libro segundo del código penal, sufrirá los jefes y asociados las penas señaladas respectivamente a los conspiradores por los mismos delitos.

Cuando tenga por objeto la perpetración de cualquier delito, se impondrá a los individuos o afiliados la pena señalada a los autores de tentativa, y a los presidentes o a los que ejerzan oficio en la misma sociedad, la pena del delito frustrado.

Art. 3.º Es también ilícita toda asociación de más de 20 personas que se reúna para tratar de asuntos religiosos, literarios o de cualquiera otra clase, aunque dicha asociación se divida en secciones de un número menor, y aunque no se reúna todos los días ni en días señalados.

Art. 4.º Son igualmente ilícitas todas las sociedades que puedan considerarse como parte de otras asociaciones, sectas o partidos.

Se exceptúan de las disposiciones contenidas en este artículo y en el anterior las sociedades formadas con consentimiento de la autoridad pública. El Gobierno podrá revocar o retirar esta autorización siempre que lo estime conveniente.

Art. 5.º Se prohíbe entre las asociaciones o sociedades de cualquiera especie toda correspondencia, bien sea por escrito, bien por medio de representantes o comisionados, siempre que dicha sociedades no se hallaren completamente autorizadas para este objeto.

Art. 6.º Las infracciones de los artículos 3.º, 4.º y 5.º anteriores se castigarán gubernativamente con una multa de 20 a 100 escudos.

Si constare que la sociedad tiene por objeto algún otro propósito criminal, los culpables serán castigados con las penas de destierro o prisión correccional.

Art. 7.º Los que para la reunión de las sociedades mencionadas en los artículos 3.º y 4.º prestasen las casas que posean, administran o habitan, incurrirán en las penas señaladas a los individuos de las mismas sociedades, y si la casa fuese un establecimiento público, podrá la autoridad gubernativa mandar cerrarle en caso de reincidencia.

Art. 8.º Toda sociedad tendrá un libro o libros en que consten los nombres de los socios y también los de los presidentes, tesoreros, secretarios u otros oficiales que ejerzan cualquier cargo en dichas sociedades o estén al servicio de las mismas.

Art. 9.º Los recaudadores o tesoreros de toda asociación, cualquiera que sea su forma, clase o denominación, llevarán un libro de entrada y salida de caudales, en que consten las personas que contribuyeren al fondo de la sociedad, y los objetos en que los caudales se han invertido.

Todo socio y cualquiera persona que directamente contribuya a dicho fondo, tiene derecho a examinar los libros de la sociedad, siempre que lo estime conveniente.

Los recaudadores y tesoreros que faltaren a lo prescrito en este artículo incurrirán en una multa de 10 a 30 escudos, sin perjuicio de las demás penas a que se hayan hecho acreedores por virtud de lo dispuesto en la sección segunda, capítulo cuarto, título XIV del código penal.

Art. 10. Las autoridades políticas pueden, a petición de parte o de oficio, inspeccionar los libros de que hablan los dos artículos anteriores, y mandar que se publique en los periódicos oficiales un estado expresivo de los ingresos y gastos de la sociedad.

Art. 11. Toda sociedad autorizada y toda reunión de más de 50 personas se considerará lugar público para todos los efectos de los artículos 169 y 193 del código penal.

Art. 12. Las disposiciones contenidas en esta ley no comprenden las asociaciones o reuniones que, durante el período electoral, tengan lugar con el propósito de dirigir las elecciones o influir en su resultado.

Madrid, 29 de Enero de 1866.—José de Posada Herrera.

Las sanas doctrinas acerca de la imprenta acaban de triunfar, aunque parcialmente, en las regiones oficiales. Este triunfo, honroso para el Gobierno, y fecundo acaso en bienes para el país, se revela claramente en la exposición a las Cortes que sirve de preámbulo al proyecto de ley adicional de imprenta presentado ayer en las Cámaras por el ministerio.

La teoría que podemos llamar filosófico-cristiana acerca de la imprenta descansa en principios de eterna verdad, conviene a saber: primero a todo desorden material voluntario y por consiguiente culpable acaecido en la sociedad y en el individuo, procede otro desorden moral que corrompe el entendimiento o el corazón, y contiene en sí como en germen trastornos y alteraciones más o menos graves; segundo la prensa libre, o cuyos escritos no son previamente examinados y autorizados, oscurece la verdad en los entendimientos, debilita los sentimientos de respeto y veneración a lo que es bueno y santo, y desata los sagrados vínculos que unen a los hombres en sociedad.

Ahora bien, lo decimos con viva y sincera satisfacción: el Gobierno ha reconocido en dicho documento estos dos principios; el Gobierno los ha expresado con noble ingenuidad, bajo la forma de un estilo animado con el calor del sentimiento que inspira la verdad. Oigamos ahora al Gobierno.

«Atento el Gobierno a descubrir el origen de estos sucesos, y teniendo en cuenta que a toda material perturbación precede un trastorno moral, no vacila en reconocer que el ludibrio incesante de agustas instituciones, y las bulonadas que se prodigan por medio de la imprenta contra lo que hay de más respetable en el orden social y político, es una de las causas que más ha contribuido a los recientes y lamentables sucesos.» ¡Magnífica confesión para escribir la cual no parece sino que el Gobierno nos ha pedido prestada la pluma! Por estas palabras se reconoce sin vacilar el primer principio que antes formulamos. Entre el Gobierno y EL PENSAMIENTO ESPAÑOL no media en este punto otra diferencia que las palabras,

Mas: no sólo reconoce el Gobierno la verdad del principio, sino también su aplicación y confirmación en el caso presente. La experiencia con sus elevados aunque duras lecciones afirma la verdad que la razón fácilmente comprende.

En orden al segundo principio no es menos explícito el Gobierno: «El sistema represivo, confisca los ministros, expone á grandes riesgos donde, como en España, el hábito de discutir los intereses públicos no ha generalizado todavía aquel espíritu de moderación, y por decirlo así, de urbanidad política sin el que todo debate es odioso é indigno de la libertad. La prensa entonces sirve principalmente para la libre emisión de insultos y vituperios, que jamás se han confundido con las ideas en la ley fundamental de ningún pueblo civilizado, y el lenguaje siempre respetuoso de la ciencia tiene que ceder al clamoreo de adocenados escritores, que abrogándose buenamente la misión de ilustrar al país por medio de la procaacidad y del escándalo, debilitan los sentimientos de respeto á las autoridades y relajan todos los vínculos del orden establecido... Cuando se ridiculiza y escarnece toda idea de orden; cuando se mata en el corazón del industrial humilde y del soldado todo sentimiento de respeto, entonces sólo se sublevar los malos instintos, siendo ocioso preguntar por su programa político á meros saltadores de la sociedad inerme.»

Así, con estos vivos colores pinta el Gobierno á la prensa libre; así describe los vicios del sistema represivo, que se contenta con castigar el mal, sin querer prevenirlo; así en una fórmula el segundo principio de la teoría filosófica cristiana acerca de la imprenta, que arriba formulamos.

Ahora bien; pues el Gobierno profesa tan francamente estos luminosos principios, ¿por qué no saca las consecuencias que necesariamente proceden de ellos? Si las perturbaciones sociales son engendradas por las morales; si las morales son producidas por la prensa libre, ¿por qué no decir de una vez que la libertad de la prensa es el pozo del abismo de donde salen las pestilencias que matan el orden y las costumbres? ¿por qué no cerrar este abismo para siempre con leyes preventivas? ¿por qué, en fin, no salvar la sociedad aunque se pierda el liberalismo?

Entre las enmiendas al proyecto de contestación al discurso de la Corona, parece que hay una del Sr. Moyano y sus amigos pidiendo una rebaja de 200 millones en los presupuestos.

Nos parece poco; pero bueno es principiar por algo. Sin embargo, la rebaja más trascendental en los presupuestos es la aprobación del proyecto de ley de incompatibilidad absoluta del cargo de diputado con el de empleado del Gobierno y la Real Casa.

Cuando todos los diputados puedan examinar los presupuestos libres de interés personal, les será fácil cortar por lo sano.

El proyecto de ley de sociedades públicas que más adelante iremos, es el efecto natural de una reacción saludable contra abusos hasta ahora consentidos y tolerados por el Gobierno. Siempre hemos estado clamando contra ellos; siempre hemos dicho que existían en nuestra nación gobiernos dentro del Gobierno, en comités y asociaciones de partidos completamente organizados; pero no se nos ha hecho caso hasta que la mala semilla ha dado el acerbó fruto que acabamos de probar.

Más vale tarde que nunca; pero ¡cuán sabio y prudente hubiera sido prevenir con disposiciones como la que ahora se presenta, crímenes que ha sido forzoso castigar!

Ahora la reacción hacia el orden va á poner en manos del Gobierno un arma de dos filos que si se esgrime por el liberalismo puede ser funestísima á la sociedad, y al contrario, manejada por un buen espíritu, pudiera ser fatal á los partidos.

La cuestión que surge en vista de estos proyectos es la de confianza en el ministro. Esta será en último resultado la que se ventile en las Cortes cuando aquellos se discutan, por más que nosotros deseáramos que en proyectos de vida ó muerte para la sociedad se pudiese prescindir de la muerte ó la vida de los ministros.

Por lo demás, en los pormenores del proyecto hay algo que advertir y que enmendar.

La España, periódico moderado, protesta en los siguientes términos contra el artículo publicado por *El Español* contra el proyecto de incompatibilidades presentado por el señor Nocedal:

«Sin propósito de suscitar polémica de ningún género ni de abrir cuestión sobre un punto que es innecesario discutir, protestamos del artículo recientemente publicado por *El Español* contra la incompatibilidad entre el cargo de diputado y los empleos públicos.»

Creemos que la incompatibilidad de que hablamos, es la única que puede salvar el régimen representativo del descrédito que le amenaza, y por consiguiente estamos en el deber de combatir ese odioso parlamentarismo que todo lo va aniquilando y corrompiendo.

Los proyectos presentados por el Gobierno en el Senado, han causado honda impresión en los ministeriales, á quienes hemos oído expresarse en diverso sentido acerca de este asunto.

Aun no se tiene noticia de que haya llegado

á Southampton el correo del Pacífico, que es esperado con general ansiedad. Daba lugar á un momento á otro.

La Correspondencia publica hoy los siguientes telegramas:

«SAN NAZARIO, 29. «El ministro de España en el Perú y el cónsul de la misma nación en el Callao, están entre los pasajeros del vapor que ha llegado hoy.

«LIMA, 21 de Diciembre. «Las relaciones diplomáticas entre España y el Perú están interrumpidas.»

El preinserto despacho confirma, como se ve, noticias que hace días circulaban; pero no dice como el Perú haya declarado la guerra á España como se aseguraba de pasados, y creemos que no pasará en silencio, si fuera cierta, una noticia de tal importancia.

Dentro de dos ó tres días tendremos ya pormenores del hecho de que da cuenta el telégrafo, y también los habrá por el mismo conducto de la situación de nuestra escuadra en las aguas de Chile.

Pregunta La Esperanza en qué consiste que figurando en la Guía francesa los Reyes legítimos de las Dos-Sicilias, no aparecen siquiera en la Guía española del año actual. Y añade luego: «Somos nosotros más enemigos de la dinastía destronada en Nápoles que la Francia napoleónica.»

Esperamos ver la respuesta que los periódicos ministeriales, á quien van dirigidos principalmente estas preguntas, dan al diario aludido.

En una correspondencia de Suiza leemos lo siguiente:

«El 1.º de Enero ha aparecido en Chaux-de-Fonds (Neuchâtel) un periódico titulado *La voz del porvenir*, que ha dado ya su programa. Del mismo modo que los liberales belgas, los liberales de Neuchâtel quieren emancipar al hombre, que no tiene necesidad de religión; emancipar á la mujer, que gime bajo la onerosa tutela del marido; emancipar á la familia, de la que es preciso arrojar al cura, y emancipar al pueblo, que es autónomo, y por consiguiente soberano de sí mismo.»

Vamos progresando.

Los dos diputados progresistas, señores Figueroa y Candau, presentan una enmienda al proyecto de contestación al discurso de la Corona.

La enmienda del Sr. Ortiz de Pinedo es posible que no llegue á discutirse, por haber otros que se separan más del pensamiento de la comisión.

El corresponsal de *El Diario de Barcelona* da á este periódico la siguiente noticia que no dudamos recibirán con júbilo los contrabayentes:

«Empieza á llamarse de nuevo la atención pública la cuestión de Hacienda, y las medidas que se dicen piensan tomar el ministro de este ramo para nivelar los presupuestos. Se asegura que aparece en primer término un aumento considerable en la contribución del subsidio industrial, no aumentando las tarifas, sino imponiéndolas á otras industrias, además de las que hoy la pagan. Considerase como industria, para este efecto, la ganadería. Se impondrá además una contribución sobre carruajes. Estos aumentos de impuestos son necesariamente impopulares, y serán objeto de acalorados debates en las Cámaras.»

Según los periódicos portugueses, del 28 al 29 era esperado en Lisboa el general Prim.

El corresponsal vicalvarista del *Diario de Barcelona* publica las siguientes noticias:

«Se ha dicho hoy en Madrid que el marqués de Salamanca ha enviado un telegrama á Portugal para que todos los emigrados españoles á aquel reino por causa de la última insurrección, que deseen trabajo, sean colocados en la construcción de los ferro-carriles que tiene contratados en aquella nación.»

ULTIMA HORA

SENADO.

El Sr. Corradi ha concluido de defender su enmienda al proyecto de contestación al discurso de la Corona, y á la hora en que salimos de la tribuna queda contestándole el señor ministro de la Gobernación.

La sesión del Congreso ha sido hoy muy corte. Varios diputados han hecho diferentes preguntas al Gobierno. El Sr. Reina acerca del estado de la ciudad de Valladolid; el Sr. Perez de Molina sobre el expediente famoso de loterías en la Habana, y otro señor acerca de las disposiciones que ha debido adoptar el Gobierno para prevenir la reproducción de la epidemia del cólera.

El Sr. Nocedal ha presentado la enmienda que insertamos en otro lugar.

TELEGRAMAS.

(Servicio particular de EL PENSAMIENTO ESPAÑOL.)

NUOVA-YORK, 18.

Se ha presentado en el Senado una resolución que tiene por objeto el pedir al presidente Johnson que se llame al ministro americano en Londres, cesando de esta modo las relaciones diplomáticas entre los dos países.

PARIS, 29.

Hay en el Libro amarillo un despacho del embajador francés en Florencia de fecha 2 del corriente, que dice que á propósito de haberse puesto en duda por el Cardenal Antonelli en una circular la leal ejecución del Convenio de Setiembre, el general Lamarmora contestó (en conversación), que nada tenía el derecho de suponer que el gobierno italiano tuviera la intención de faltar á sus compromisos en dicho Convenio.

ROMA, 28.

Se ha establecido una tarifa de derechos de fardos sobre los buques que entren en los puertos romanos.

CORTES.

SENADO.

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SEÑOR DUQUE DE LA TORRE.

Sesión celebrada el día 29 de Enero de 1866.

Se abrió á las dos, y leída el acta de la anterior, fué aprobada.

Fue aprobado sin debate alguno el dictamen de la comisión de exámen de calidades, que había quedado sobre la mesa en la sesión anterior, relativo á las del señor D. Santiago Fernandez Negrete.

Ocupada la tribuna por el señor ministro de la Gobernación, leyó este un proyecto de ley adicionando

Acto continuo, el mismo señor ministro leyó otro proyecto de ley de asociaciones públicas.

El Sr. PRESIDENTE: Los proyectos de ley que acaban de leerse pasarán á las secciones para nombramiento de comisión.

ORDEN DEL DIA.

Discusión del proyecto de contestación al discurso de la Corona.

Leído dicho proyecto, se leyeron también varias enmiendas que decían así:

«AL SENADO.—El que suscribe tiene el honor de proponer al Senado la siguiente enmienda al párrafo segundo del proyecto de contestación al discurso de la Corona, en uso del derecho que le concede el artículo 92 del reglamento:

«El Senado lamenta el éxito poco satisfactorio que han tenido todas las cuestiones políticas, económicas y administrativas, resueltas por el Gobierno de S. M. durante el interregno parlamentario, deplorando al propio tiempo como fiel y celoso guardador de la ley fundamental del reino, las medidas inconstitucionales que se han adoptado anteriormente para sofocar una insurrección militar que no se supo prevenir, y cuyo suceso ha puesto en grave peligro la disciplina del ejército, el orden público y los intereses sociales.»

Palacio del Senado, 25 de Enero de 1866.—Fernando Corradi.

«Pedimos al Senado se sirva acordar que el párrafo tercero del proyecto de contestación al discurso de la Corona, presentado por la comisión, se sustituya con el siguiente:

«El Senado lamenta que el Gobierno de S. M., consultado con fría calma los intereses permanentes y los sentimientos inalterables de la nación, no se detuviese ante la gravedad del reconocimiento del reino de Italia y de sus incalculables consecuencias. Hasta la ocasión, la firma y los medios elegidos para realizar ese acto, han sido los menos adecuados al fin principal que en esa cuestión complicada podía aspirar la España, y es el de obtener garantías seguras de la conservación y fianzamiento del poder temporal del Papa. A. V. M. no se oculta que ese poder, en la organización actual de las naciones, es indudablemente necesario para el libre ejercicio de la potestad espiritual del Sumo Pontífice, en cuya condición se basan, no sólo los más altos intereses del Catolicismo, sino también la tranquilidad del mundo.

El Senado, por tanto, espera de la sabiduría de V. M. y de sus elevados sentimientos, que hará imprimir en este gravísimo asunto el sello de justicia, de piedad y de respeto al derecho que de su católica Reina aguarda cumplida la católica España.

Palacio del Senado, 25 de Enero de 1866.—Manuel de Seijas Lotano.—Lorenzo Arrazola.—Francisco de Lersundi.—Duque de Veragua.—El marqués de Novaliches.

Se añadirá al párrafo que termina «providencial del mundo», lo siguiente:

«Sin embargo, el Senado cree que ni la ocasión ni el modo con que se ha verificado el reconocimiento de Italia, ha sido ni oportuno ni conveniente.

Palacio del Senado, 25 de Enero de 1866.—El marqués de Miraflores.

El señor secretario SANCHEZ SILVA: La mesa ha examinado estas enmiendas, y según su criterio, las que más se apartan del sentido y texto del dictamen de la comisión, son, por su orden, primero, la del Sr. Corradi, y después la de los Sres. Arrazola y otros.

El Sr. CALONGE: Pido la palabra para una cuestión previa.

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S.

El Sr. CALONGE: Yo lamenta, señores senadores, volver á molestar vuestra atención en un asunto que ya se trató el otro día; pero no es culpa mía. La mesa, cuya decisión yo respeto, creyó que no era entonces la ocasión oportuna para entrar en este debate; así, que aun cuando yo tenía por más conveniente que este asunto no se tratase dos veces, me veo en la necesidad de ocuparme por segunda vez de él, si quiera tenga el sentimiento de que mi amigo el Sr. Corradi no haya entrado en esta cuestión, como prometió el día anterior, pues no dudo que aun cuando la mira se baje un aspecto enteramente distinto, la hubiera tratado con la profundidad y el talento que distinguen á S. S.

La cuestión, señores, es á mi entender importantísima, y aunque procurase hacerme cargo de ella lo más ligeramente posible, no puede menos de reconocerse que se presta á largas é importantes consideraciones. El Gobierno ha declarado, en el sentido que esto puede hacerse, que la cuestión era completamente libre, dejando su apreciación al Senado, según manifesté en la última sesión el señor presidente del Consejo de ministros, que me permitiera le diga que en esta parte no ha andado el Gobierno muy acertado, porque no es esta una cuestión que sólo atañe á los Cuerpos colegisladores, sino que entraña la cuestión de orden público, que el Gobierno no puede declinar en nadie.

Hay pesa sobre la capital de la monarquía y algunas otras provincias, el estado de sitio, que sólo puede fundarse en una necesidad universalmente sentida, pues es una situación excepcional que priva á los españoles de los derechos que la Constitución les concede, y que sólo puede el Gobierno imponer aceptando por completo toda la responsabilidad. Y yo no diré, y así lo ha declarado el Gobierno de S. M., que esta puede pesar real y efectivamente sobre los Cuerpos colegisladores, pero podría afectarlos moralmente.

Yo pregunto, señores: ¿os sentís hoy con toda libertad, no digo para votar, pues para eso siempre la tiene el hombre que, puesta la mano en su conciencia, sólo tiene en cuenta el bien del país, sino para discutir con toda libertad? Yo, por mi parte, señores, y respeto las convicciones de otro cualquier señor senador en este punto, debo decir que no lo tengo. Yo soy hombre de Gobierno siempre y mucho más cuando hago la oposición, pues entonces cuido de una manera asidua y vigilante de todas mis acciones, porque creo que en estos bancos, dirigiendo al Gobierno los cargos que se crean convenientes, no se debe pasar nunca del límite que exige el bien público, ni deben sostenerse máximas y principios que luego no puedan llevarse á cabo en el poder, siendo preciso ser en este sitio lo que los ingleses llaman con oportunidad *opinion de la Reina*. Es decir, una opinión que si las circunstancias la llaman á dirigir el Estado, pueda hacerlo con los principios que sostiene.

Yo no me siento, señores, con fuerzas para dirigir al Gobierno en estas circunstancias todos los cargos que podrían hacerse en el estado normal. Todos mis amigos, todos los hombres del partido moderado, han creído de su deber dar su apoyo al Gobierno en esta cuestión, y así lo han manifestado sacrificando no pequeñas cosas que á guisa de sobres, señores senadores, cuando de todo se pueda hablar sin el inconveniente que hoy habría de hacerlo en momentos en que con esto pudiera añadirse combustible á un fuego mal apagado. Porque fuerza es reconocer que las circunstancias que obligaron al Gobierno á hacer la declaración de estado de sitio, no han cesado, puesto que todavía se sostiene. Y aquí debo advertir que por mi parte no se hará la más pequeña exaltación para levantarlo, porque sólo el Gobierno tiene los antecedentes necesarios para juzgar lo que esto debe durar, si bien después podrán pedirse esos antecedentes para examinar debidamente ese asunto.

Ahora bien, no me parece lo más oportuno en circunstancias de esta clase entrar en una discusión tan grave é importante como lo es la contestación al discurso de la Corona, porque suponiendo que la oposición que se le haga sea justa y tal que la opinión pública acepte todo lo que se dice, se haría un grave mal, porque el Gobierno quedaría sin las condiciones necesarias para prestar el servicio que exigen los servicios públicos, y nosotros, que somos, no enemigos, sino adversarios francos y leales, queremos que conserve todo el prestigio que tan necesario le es en estos momentos, y por eso no queremos discutir ahora el dictamen, porque fácilmente se comprende que de hacerse esto con la detención que merece, y pudiéndose hablar de los acontecimientos que han teni-

do lugar, y en los que hay una porción de personas complicadas, esto podrá presentar sus dificultades, porque lo que se diga en un Cuerpo tan alto y respetable como este, podrá tener bastante influencia. No es, pues, por un principio de oposición por lo que no podemos entrar en el debate, pues tenemos el valor suficiente para hacerla francamente, sino porque hoy hemos creído que debíamos dar el nuestro apoyo al Gobierno, no deseando que caiga el actual, porque juzgamos sería un mal para el país en la actualidad; pero queremos que este apoyo sea de una manera que no se convierta contra los principios que hace muchos años venimos sosteniendo.

Estas razones nos han movido á rogar al Senado el otro día, y volvemos á hacerlo hoy, que tome en consideración la cuestión previa, que se diga al Gobierno en el debate que sobre ella se abría, y que este alto Cuerpo colegislador decida lo que crea conveniente. Yo, por mi parte, declino toda la responsabilidad de lo que pueda surgir de un debate que el Gobierno de S. M. ha provocado, y en el que no puede haber la libertad suficiente, por más que el estado excepcional no alcance á este recinto, toda vez que puede ejercer su influencia en las publicaciones que apoyen ó combatan unas ó otras de las doctrinas admitidas. Yo, señores, meditaré mucho, y mis amigos harán lo mismo, respecto al modo que debemos proceder en este debate, y en el caso que el Senado tome en consideración esta proposición incidental, me reservo esplanar algo más las razones que en mi concepto puedan aducirse en su apoyo.

El señor ministro de GRACIA Y JUSTICIA (Calderón Collantes): Empezaré dando las gracias al Sr. Calonge por la templanza con que ha tratado la cuestión previa, y procuraré correspondérle á ella, examinándola en el frío terreno del razonamiento. Se ha lamentado su señoría de que este asunto se trate hoy por segunda vez y de que no se terminara en el primer día. Y me permitirá S. S. que le diga que esto no es culpa del Gobierno, estando perfectamente en su lugar la resolución que adoptó la mesa, porque no puede suscitarse cuestión previa de ninguna clase hasta tanto que empiece la discusión del asunto á que esta se refiere, y el art. 72 del reglamento demuestra cumplidamente que el dignísimo señor presidente del Senado no podía proceder de otra manera, porque determinándose que los proyectos de ley y asuntos graves y de importancia se imprimirán y repartirán á los señores senadores para que los recibieran dos días antes del señalado para su discusión, el dictamen de que se trata no solamente no se había repartido, sino que ni se hallaba impreso, y por consiguiente, no podía estar señalada discusión, y no había términos hábiles para suscitarse cuestión previa. Me parece promovió el señor marqués de Novaliches.

Cierto es que el Gobierno declaró libre esta cuestión en el sentido que naturalmente se hace esta declaración; pero el Sr. Calonge la ha dado, en mi concepto, una interpretación algo equivocada, pues el señor presidente del Consejo de ministros sólo se refería á la resolución afirmativa ó negativa, no era cuestión de Gabinete, pero no dijo de ninguna manera que fuera indiferente á una cuestión de tanta importancia.

El argumento capital del Sr. Calonge está reducido á si el estado de sitio es necesario ó no, pues en el primer caso se prueba, en su concepto, que el orden público, y entonces la discusión ofrece dificultades; y en el segundo se estará en el caso de levantarle: y á esto sólo contestaré á S. S. que sin peligro del orden público no puede levantarse el estado de sitio, pero que no ofrece ninguno la discusión en los Cuerpos colegisladores, pues hay mucha diferencia entre una y otra cosa, porque los Cuerpos colegisladores no debilitan sino que robustecen la acción del Gobierno, porque en ellos toma gran parte de su fuerza moral.

De modo que el Senado puede discutir cumplidamente la política del Gobierno sin otro límite que el de su propia conciencia, sin que por duros que sean los cargos que puedan dirigirse al Gobierno, plegue en lo más mínimo la tranquilidad pública.

Ha dicho el Sr. Calonge que meditará mucho, igualmente que sus amigos, la manera en que debe hacer la oposición, declinando toda la responsabilidad en el Gobierno de S. M.; y este desde luego declara ante el Senado que la acepta por completo; de otro modo no se opondría, como se opone, á que se tome en consideración la cuestión previa. De lo manifestado por el Gobierno el otro día, no se deduce que quiera eludir ni compartir con el Senado la responsabilidad; por el contrario, la toma toda sobre sí. Esto sin contar con que no puede producir peligro alguno el debate en un Cuerpo eminentemente conservador, en el que por más que aparezcan duros y severos los cargos que puedan dirigirse al Gobierno, nada ha de decirse que pueda alentar y dar vigor á los elementos revolucionarios; y hago en esta parte más justicia á los señores senadores que la que les ha hecho el Sr. Calonge, lo mismo á los de la oposición que á los demás.

Por lo demás, la cuestión de si ha de aceptarse ó no esa proposición incidental, es de la competencia del Senado, y así lo ha reconocido el Gobierno, sin que por esto pueda decirse que mira este asunto con indiferencia y que lo abandona, pues es enteramente distinta una cosa de otra, porque si bien el Gobierno respeta el juicio del Senado, tiene la convicción íntima de que debe entrarse cuanto antes en la discusión del dictamen, pues de otra manera no podría el Senado ocuparse de otros asuntos de importancia que tanto reclaman su atención, pues no es dado entrar á discutirlos mientras no se discuta y apruebe el mensaje al discurso de S. M.; y apelo á la conciencia de los señores senadores para que me digan si sería conveniente exigiesen que el estado de sitio se prolongase por cuatro, cinco ó seis meses, aun cuando yo creo que podrá levantarse dentro de pocos días, estuviesen los Cuerpos colegisladores durante todo ese tiempo sin discutir, sin ocuparse de los presupuestos, ni aun de esas mismas leyes que hoy se han presentado y que son una parte del sistema que en este punto se propone el Gobierno, y que han presentado como indispensables, sin contar con que si bien el orden público está hoy asegurado, pudiéramos venir un día en que fuera necesario venir al Senado para presentar á su deliberación cualquier proyecto que se juzgase necesario, y según el sistema del Sr. Calonge nada de esto podría hacerse.

Ya en el orden militar se han adoptado las medidas conducentes, sin que pueda hacerse otro tanto en el orden legislativo, como no sea con el concurso de los Cuerpos colegisladores. No puede, por consiguiente, señores, prescindirse de entrar en la discusión del mensaje si hemos de ocuparnos en los proyectos relativos á la conservación del orden público, que tanta atención merece, y de los que se refieren á las materias de Hacienda, que tan importante es resolver, y el Sr. Calonge, aun cuando no se haya dedicado al estudio de estas cuestiones racionales, no habrá podido menos de fijar su atención en ellas y comprenderá la necesidad que hay de que el Senado lleve su atención en ellas.

Puede, por tanto, S. S. desechir todo temor respecto á la mayor ó menor libertad con que se puede entrar en esta discusión, en la seguridad de que ni de sus palabras ni de las de sus amigos se ha de seguir daño alguno para la causa del orden público; y el gobierno que, como ha dicho muy bien S. S., tiene todos los antecedentes necesarios para juzgar de la competencia de ciertos actos políticos respecto al orden público, declara que no hay peligro alguno en que se abra discusión, así en este como en el otro Cuerpo colegislador, y que por el contrario, es indispensable hacerlo así, pues el crédito del país y la Hacienda reclaman las medidas oportunas del mismo modo que el orden público, porque con esas leyes y alguna otra que yo también tendré el honor de traer, haremos un gran bien á la causa del orden público, y luego, por consiguiente, al Senado que, pensando en su alta salud, las razones que se han expuesto, se persuaden de que, si bien las circunstancias del momento no permiten levantar el estado de sitio, puede entrarse sin peligro en la discusión del dictamen.

El Sr. CALONGE: Voy á rectificar un sólo concepto, atendiendo estrictamente á lo que el reglamento previene. Ha dicho el señor ministro de GRACIA Y JUSTICIA que al querer yo que quede aplazada la discusión del proyecto de mensaje, por un término que puede ser más ó menos corto ó dilatado, pongo al Senado en el caso de que no se ocupe en este tiempo de otros asuntos de gran importancia, y precisamente el artículo del reglamento en que S. S. parece que podía fundarse, es el 32, que dice que el proyecto de contestación al discurso de la Corona, y los dictámenes de exámen de calidades, se discutirán con preferencia á otros menos urgentes; de suerte que no previenen que se antepongan á otros que sean de más urgencia, y por lo tanto, aun cuando se aplazara esta discusión, no habría dificultad en tratar de otros asuntos que fueran más importantes.

El señor ministro de GRACIA Y JUSTICIA (Calderón Collantes): Efectivamente, el art. 32 del reglamento dice lo que S. S. ha expresado; pero hay establecida una jurisprudencia constante en los Cuerpos colegisladores que viene á completar el sentido de ese artículo, y según la cual, por un sentimiento de respeto á la Corona, hasta que el mensaje se discuta, no hay ejemplo de que se haya tratado ningún otro asunto; y hay otra razón capital, y es, que si hay peligro en la discusión del mensaje, no lo habría menos en la discusión de proyectos como los que se han leído, porque al tratarse de medidas referentes al orden público, para adoptarlas se exigirían las explicaciones que creyeran convenientes los señores senadores, y habría de entrarse en las causas que han podido influir en los acontecimientos ocurridos, viniéndose á tratar, por consiguiente, la política interior del Gobierno, del mismo modo que se vendría á discutir la exterior al ocuparse el Senado de un proyecto de ley que se refiere á esta.

Vea, pues, el Sr. Calonge cómo quiere dos cosas que se rechazan, toda vez que por una parte dice que no se discuta la política del Gabinete, y por otra conviene en que podemos ocuparnos de proyectos que necesariamente nos llevarán á esa discusión, y lo mismo podría decirse respecto á la política administrativa cuando se tratara de los presupuestos u otros proyectos que se refieren á estas materias. Discutamos, pues, el mensaje, que en ello no hay dificultad alguna, puesto que, prescindiendo de las razones que ya he indicado antes, tenemos en apoyo de esta opinión lo que acabo de manifestar al Senado.

El Sr. CALONGE: Yo no he dicho que se antepusiera al debate del mensaje de la Corona ningún otro asunto más ó menos importante, siquiera sean esas leyes á que S. S. se ha referido y á las que no he hecho ni la más mínima alusión; pero de esto á creer que antes de discutirse la contestación al discurso de la Corona, no pueda tratarse de ninguna ley por mucha que sea su importancia, hay una distancia inmensa.

Por lo demás, conste que yo no he querido de ninguna manera que aquí se faltase al respeto y acatamiento que se debe á la Corona, no habiendo tenido ro objeto, en lo que ya he manifestado, que contestar á S. S. acerca de las prescripciones del reglamento.

El señor marqués de MIRAFLORES: Aun cuando el haber entrado el señor ministro de Gracia y Justicia en el fondo de la cuestión, parece que podría darme derecho para hacerme cargo de algunos de los argumentos que se han aducido, sólo voy á ocuparme de una especie de inculparción que me ha dirigido su señoría al decir que yo había suscitado la cuestión previa, cuando precisamente pedí la palabra para una cuestión de orden, y todos los señores senadores recordarán que lo que hice fué dirigir una súplica al señor presidente en la forma que yo creía podía hacerla para que no tuviese lugar esta discusión, indicando que, si estaba en sus facultades, tuviese la dignidad de no fijar el día para que comenzase el debate de la contestación al discurso de la Corona hasta que estuviese levantado el estado de sitio en el distrito militar de Castilla la Nueva; en lo que no hice más que corroborar las indicaciones hechas por el señor marqués de Miraflores al día 5, me parece, en ocasión en que el señor presidente del Consejo de ministros tuvo la bondad de decirnos lo que había ocurrido, dándonos cuenta de la suspensión de las garantías constitucionales en el distrito á que me he referido; y creo que en las atribuciones del señor Presidente del Senado estaba el poderío hacer así, conforme al espíritu y letra del art. 72 del reglamento, que mi amigo el Sr. Calderón Collantes ha citado, habiendo además la circunstancia de que el Gobierno de S. M. manifestó que no tenía empeño en ello.

Por consiguiente, la cuestión hubiera quedado terminada con sólo que el señor presidente no hubiese señalado la discusión del dictamen hasta que hubiese cesado el estado de sitio en este distrito.

Hecho esto, no quiero molestar por más tiempo la atención del Senado, reservándome exponer las consideraciones que crea convenientes para el caso en que, tomada en consideración la proposición incidental, se pueda tratar el asunto con toda libertad, debiendo solamente indicar lo que dije ya el día anterior respecto á que si bien no hay duda de que los señores senadores en este recinto tienen amplia libertad para decir lo que crean conveniente, no es menos cierto que por la declaración del estado de sitio, nuestra palabra queda ahogada en esta bóveda, porque no se consienten á la prensa las apreciaciones y comentarios de todo lo que aquí se dice, ni aun podrá publicarse lo que dice el *Diario de las Sesiones*, no permitiéndose á los diarios de oposición lo que se consiente á otros.

El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el Sr. Corradi; pero ruego á S. S. que se limite todo lo posible á la cuestión personal, atendida la conveniencia de entrar cuanto antes en el debate anunciado.

El Sr. CORRADE: Respondo la observación del señor presidente, y sólo diré á guisa de palabras, supuesto que el señor ministro de Gracia y Justicia no se ha hecho cargo de una indicación que expuse en la última sesión.

El Sr. Calonge ha considerado la cuestión que nos ocupa creyendo que el Senado no tendría libertad para discutir aquí lo que es discutible; yo lo voy de otro modo, pues estoy convencido de que la Cámara tiene así libertad moral como libertad real para juzgar de los actos del Gobierno. Pero el señor ministro de Gracia y Justicia me permitirá que le diga que con arreglo al art. 34 de la Constitución, las sesiones del Senado deben ser públicas, y que esa publicidad puede tener obstáculos, ya en la asistencia del público á esas tribunas, ya en la circulación de nuestros discursos, ya en la apreciación de los mismos por los órganos de la imprenta. Cualquiera de estas libertades que se coarten, da por resultado el coartar nuestra propia libertad.

Pues bien; yo pregunto á S. S.: ¿cuál va á ser la suerte de nuestros discursos respecto á su circulación por medio de la prensa?

Señores, la prensa y la tribuna son hermanas, se completan, respectivamente, son dos signos que marcan el grado de civilización de un pueblo, son los dos polos sobre que gira la máquina constitucional; allí donde la imprenta está coartada, impura la tiranía, y allí donde la tribuna está coartada, reina la servidumbre.

Por consiguiente, esta es la cuestión; porque ningún señor senador puede consentir que nuestros discursos circulen coartados por el lazo del fiscal ó la espada del capitán general del distrito. ¿Se ha de impedir por los periódicos que omitan su juicio imparcial sobre los principios y las ideas que aquí exponemos, si ó no? Si se pretenden esas manifestaciones de la opinión pública, yo no tengo inconveniente en que continúe el estado de sitio; pero si nuestros discursos no han de aparecer libremente, si se coarta la libertad que tiene la imprenta para decir sobre ellos cuanto se le ocurra, si ha de haber, en una palabra, libertad aquí y oposición fuera, entonces mi voto será contrario á que entremos en la discusión del mensaje, porque he considerado sería faltar al espíritu de la Constitución de la Monarquía.

